

¿Quién invertirá en banda ancha?

¿Quién invertirá en el despliegue de las nuevas redes de banda ancha? Una pregunta tan inocente como ésta nos podría llevar a una respuesta igualmente cándida: los operadores. Sin embargo, en un sector tan regulado como las telecomunicaciones, las condiciones en las que se han de realizar esas inversiones pueden afectar sensiblemente a la viabilidad de las mismas.

Álvaro Martín Enríquez

Hace unos meses escribía en esta misma sección sobre el debate surgido recientemente en relación con la siempre cuestionada neutralidad de la red. En líneas generales, podría decirse que el modelo de negocio tradicional basado en la comercialización de los servicios de telecomunicaciones ha visto reducidos sus márgenes ante la intensificación de la competencia, que ha contado con la connivencia de los reguladores. En su lugar, los proveedores de aplicaciones y contenidos han podido crecer gracias a la mejora de las infraestructuras sobre las que operan, con inversiones más reducidas que las de los operadores de telecomunicaciones.

La gran cuestión que subyace en esta discusión es cuáles serán las condiciones en las que habrán de realizarse las inversiones necesarias para el despliegue de las redes de nueva generación. Como es bien sabido, el negocio de las telecomunicaciones exige realizar cuantiosas inversiones constantemente, como respuesta a las necesidades de los usuarios y al propio cambio tecnológico.

La Comisión Europea dio a conocer a finales de septiembre una serie de recomendaciones sobre

cómo «fomentar la inversión a la vez que se salvaguarda la competencia». En ellas se apuesta de entrada porque los operadores ofrezcan acceso mayorista a sus redes de fibra óptica, de manera que otros puedan ofrecer servicios sobre ellas. Por descontado, la Comisión considera que la fijación de precios debería hacerse con orientación a costes e incluir tanto la prima de riesgo para el inversor como un margen que le permita generar atractivos beneficios. También opta por promover diferentes obligaciones para los operadores en función de la situación competitiva en el territorio (que varía en áreas urbanas y rurales, por ejemplo) e impulsar las alianzas de las operadoras para realizar inversiones conjuntas que les permitan explotar las sinergias.

Pese a esta declaración de intenciones de los reguladores, lo cierto es que los planes de inversión en fibra óptica se han ralentizado como consecuencia de la crisis. En España, tanto Telefónica como Vodafone y Orange han anunciado pilotos de fibra, pero el último informe anual hecho público por la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones (CMT) refleja una caída generalizada



Imagen propiedad de Thinkstock.

de las inversiones en red en 2008 y en 2009, con la única excepción de Jazztel, que todavía está apostando fuerte por las tecnologías sobre par de cobre (xDSL).

Ante esta situación, el regulador nacional realizó hace unos meses un estudio sobre la viabilidad del despliegue de redes de fibra óptica en España. En él se calculó que Telefónica, como operador incumbente, debería invertir unos 4.700 millones de euros para desplegar su red hasta 2023 en un escenario conservador. Sin embargo, para un operador alternativo, la factura ascendería a más de 5.300 millones. Como apunte adicional, el grueso de la inversión (92%) estaría destinado a cubrir territorios fuera de las dos principales ciudades del país (Madrid y Barcelona). Estas cifras llevan a replantear la disposición de los operadores a realizar a corto plazo inversiones en fibra óptica en un escenario de márgenes decrecientes y rápido crecimiento de la banda ancha móvil. Así, llegamos de nuevo a la pregunta inicial, cuya respuesta parece ahora menos evidente: ¿quién invertirá en el despliegue de las nuevas redes de banda ancha? ::